

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Real orden de 31 de Julio de 1900, declarando la conveniencia de que los Ayuntamientos se atengan á la legislación de Clases pasivas del Estado, en lo que afecta á las escalas graduales del servicio, para la concesión de jubilaciones á los empleados nombrados con anterioridad á la ley de 20 de Agosto de 1870.

Vista la instancia, dirigida á este Ministerio, por D. Juan Palacios Gabarrón, Oficial mayor del Ayuntamiento de Cartagena, en súplica de que se dicte la debida resolución de carácter general, disponiendo que para conceder jubilaciones á los funcionarios municipales que empezaron á prestar sus servicios *con anterioridad á la ley Municipal de 1870*, ó pensiones á sus viudas y huérfanos, se atengan las Corporaciones á la ley que regula las jubilaciones y pensiones de los empleados civiles de la Administración del Estado, ó, por lo menos, que se autorice á los Ayuntamientos para que puedan aplicar las disposiciones expresadas:

0277

Resultando que el recurrente funda principalmente su pretensión en que no obstante el crecido número de disposiciones dictadas, para mejorar los derechos pasivos de los empleados municipales que empezaron á prestar sus servicios con anterioridad á la ley de 20 de Agosto de 1870, vienen regulándose aquéllos por un decreto falto de equidad y justicia, puesto que iguala los derechos que concede al empleado que lleva treinta y cinco ó más años de servicios con el que sólo cuenta veinte:

Resultando que esta desigualdad en jubilaciones y pensiones sólo existe en la legislación municipal, sin que nada lo justifique, puesto que parece lógico que la ley tienda á favorecer, como hace el Estado en sus diversos ramos, á los empleados de mayores servicios, premiando y estimulando su constancia, que constituye mérito extraordinario de celo y aptitud:

Considerando conveniente y plausible para el mejor servicio todo acuerdo ó disposición encaminada á premiar y excitar el celo de los funcionarios públicos en los diferentes ramos de la Administración, estableciendo las necesarias y debidas recompensas después de dilatados y justificados servicios, siempre que éstos se hayan prestado con la ilustración, competencia, honradez y demás aptitudes indispensables en aquellos que tienen á su cargo la difícil misión de estudiar, formular y ejecutar los acuerdos y pro-

videncias que influyen directamente en la mejor y más provechosa administración de los pueblos:

Considerando que las jubilaciones, pensiones y orfandades son de carácter obligatorio en todos los funcionarios municipales cuyos nombramientos sean anteriores á la ley Municipal de 20 de Agosto de 1870, con arreglo á lo terminantemente prevenido en el Real decreto de 2 de Mayo de 1858 y distintas Reales órdenes dictadas por este Ministerio, entre ellas las de 11 de Junio de 1875, 30 de Mayo de 1877, 1.º de Junio de 1886, sin que acerca de estos reconocidos derechos pueda existir duda alguna, mucho más cuando los Tribunales Contenciosos, en distintas sentencias, muy especialmente por las de 15 de Marzo de 1888 y 5 de Diciembre de 1889, confirman las obligaciones de las Corporaciones municipales á reconocer derechos pasivos á los funcionarios anteriores á la ley Municipal citada:

Considerando que al Real decreto referido de 2 de Mayo de 1858 debe concedérsele mayor alcance que el de ley reconocedora de la obligación general imperiosa y taxativa de reconocimiento y creación de derechos á jubilaciones, socorros ó pensiones individuales á los funcionarios anteriores á 1870, en recompensa de los buenos servicios por ellos prestados, sin que reconocidas y justificadas las condiciones estipuladas de aptitud para el disfrute de dichos derechos, se cohíba á las Corporaciones impidiendo que, en

0278

uso de su perfecto derecho y justificada independencia, puedan asimilarse á las disposiciones generales establecidas en la legislación del Estado para la creación de derechos pasivos:

Considerando que el art. 2.º de dicho Real decreto, al estipular que tendrán derecho á jubilación los empleados municipales de nombramiento anterior á la ley Municipal vigente, que durante veinte años hayan desempeñado empleos del Ayuntamiento, sólo se limita á fijar la necesaria condición de normalidad para el disfrute de derechos pasivos, estableciendo como condición precisa el número minimum de años de servicios necesarios, sin que esta condición deba interpretarse como imposibilidad en las Corporaciones de admitir libre y voluntariamente las escalas de justa proporción de servicios, reconocidas no sólo para los funcionarios del Estado, sino para los de la provincia, y todos aquellos que en cualquier forma trabajan y cooperan en los distintos ramos de la Administración pública:

Considerando que la interpretación dada al art. 2.º del Real decreto anteriormente citado, aplicándose en sentido restrictivo, no es seguramente el espíritu que informa la misma Real disposición citada, puesto que de ser así se hubiese taxativamente consignado en forma clara y terminante, constituyendo, de admitirse dicha interpretación, manifiesta injusticia, puesto que, aparte de considerar á los empleados municipa-

les en forma bien distinta y perjudicial en comparación con los del Estado y la provincia, se comete la verdadera injusticia de estimar y recompensar en la misma forma al que presta su labor é inteligencia durante veinte años que al que trabaja doble tiempo, poniendo en favor del servicio sus facultades intelectuales durante los mejores años de la vida:

Considerando de justicia y equidad el reconocimiento de los servicios por escalas graduales, empezando á contar desde los veinte años como minimum, á lo cual no han de resistirse ni negarse las Corporaciones de referencia, que han demostrado siempre grandísimo interés en favor de sus servidores, grantizando así en la ancianidad el porvenir de los mismos, y no permitiendo por decoro propio que sean de peor condición que los del Estado y la provincia:

Considerando que no es posible ni procedente al resolver, á instancia de parte, imponer la reglamentación que ha de observarse en materia de tanta importancia y transcendencia, objeto hoy además de detenido estudio por la Comisión nombrada para redactar el reglamento de Secretarios y funcionarios municipales, pero sí procede hacer justas recomendaciones, mucho más cuando las ventajas interesadas por el recurrente se han reconocido ya á los Contadores de fondos municipales; y

Teniendo en cuenta las razones de equidad y justicia anteriormente expuestas,

0279

S. M. el REY (Q. D. G.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien estimar la instancia de D. Juan Palacios Gabarrón, declarando, en su virtud, la conveniencia de que los Ayuntamientos libremente, si lo consideran justo, equitativo y procedente, se atengan á la legislación de Clases pasivas del Estado en lo que afecta á las escalas graduales del servicio para la concesión de jubilaciones á los empleados nombrados con anterioridad á la ley de 20 de Agosto de 1870, quedando al efecto autorizadas dichas Corporaciones para poder aplicar las disposiciones del Estado referidas, siempre que lo consideren justo, procedente y equitativo á su juicio, como asunto de su exclusiva competencia.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. San Sebastián 31 de Julio de 1900.—
E. DATO.—Sr. Gobernador civil de Murcia.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Real orden de 19 de Enero de 1901, disponiendo que la Corporación municipal tiene competencia y facultades propias para conceder á todos los empleados municipales que cuenten más de veinte años de servicio, sean de nombramiento de la Corporación ó de la Alcaldía Presidencia, las pensiones ó socorros á que se hagan acreedores por sus servicios, en armonía con el Real decreto de 2 de Mayo de 1858.

EXCMO. SR:

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, con fecha 19 del actual me comunica la Real orden siguiente:

«EXCMO. SR. Vista la instancia elevada á este Ministerio por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta Capital, en súplica de que se declare si la función discrecional que á la Corporación conceden los artículos 6.º y 7.º del Real

0280

decreto de 2 de Mayo de 1858, para conceder pensiones y socorros á los empleados municipales, á sus viudas y huérfanos, se entiende que es extensiva y puede aplicarse á los de Policía Urbana y rural y aquellos otros servidores cuyo nombramiento no corresponde á la misma y si á la Autoridad de la Alcaldía Presidencia, y que en caso contrario se disponga y otorgue de ejercicio de esta facultad respecto de tales empleados cuando en ellos concurra el requisito de contar por lo menos quince años de servicios satisfechos con los fondos del Municipio.

Resultando que en la solicitud de que se trata se hace constar que con frecuencia acuden á la municipalidad servidores de ella, como por ejemplo los de Policía Urbana y rural, excluidos expresamente de jubilación por el art. 2.º del Real decreto de 2 de Mayo de 1858, en demanda de que por sus largos y buenos servicios se les conceda alguna pensión con que hacer menos doloroso su estado precario, á que les reduce unas veces la avanzada edad y los achaque derivados del ejercicio de tan penosos cargos, y otras la completa inutilidad física para continuar trabajando, contraído en actos del servicio y por consecuencia de los accidentes y riesgos á que están expuestos en sus destinos, cuyas peticiones aparecen muy justificadas á juicio del Ayuntamiento que entiende deber moral suyo amparar á sus servidores retribuidos con reducido haber y que

la ley excluye en el derecho de jubilación cuando dejan de serlo.

Considerando que es de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos el acordar las jubilaciones que considere procedentes para los funcionarios que se hayan distinguido por sus servicios como asimismo las pensiones que se consideren de justicia para premiar los servicios prestados, mucho más cuando se trata de funciones en las cuales se pierde la salud, llegando hasta la inutilidad física.

Considerando que el art. 6.º del Real decreto de 2 de Mayo de 1858 autoriza á los Ayuntamientos para conceder pensiones y socorros á todos los funcionarios aunque sean de la Policía Urbana, siempre que se hayan inutilizado en el servicio ó el Ayuntamiento considere que son acreedores á dichas pensiones por las razones que se justifiquen en los debidos expedientes.

Considerando que tratándose como se trata de materia de exclusiva competencia de los Ayuntamientos no es necesaria la autorización de la Administración Central que ha de encontrar siempre plausible los justos premios que se otorguen al personal por causas justificadas, S. M. el REY (q. D. g.) y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer en contestación á la consulta de referencia, que la Corporación recurrente tiene competencia y facultades propias para conceder á todos los em-

0281

pleados municipales que cuenten más de veinte años de servicios, sean de nombramiento de la Corporación ó de la Alcaldía Presidencia, las pensiones ó socorros á que se hagan acreedores por sus servicios, en armonía con lo prevenido en el citado Real decreto de 2 de Mayo de 1858.—

JAVIER UGARTE.»

1860